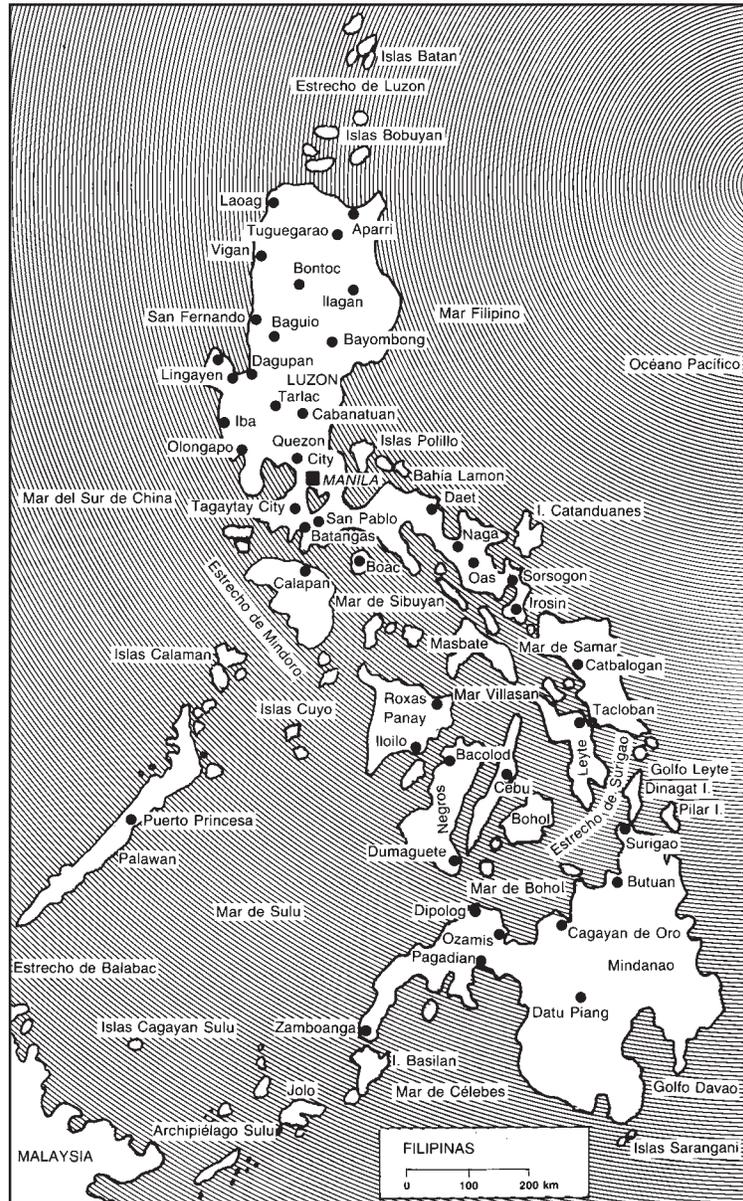




FILIPINAS





## LAS FILIPINAS EN 2003

ASUNCIÓN BENÍTEZ RUSH

### INTRODUCCIÓN

Muchos presidentes filipinos se han visto acosados por crisis políticas y socioeconómicas durante sus administraciones, pero la presidenta Gloria Macapagal-Arroyo al parecer ha heredado una situación de turbulencia que rara vez han experimentado sus predecesores. Su debatido trayecto hacia la presidencia pudo haber sido la causa de los desafíos políticos que enfrenta en la actualidad. Elegida vicepresidenta en 1998, Arroyo fue la sucesora constitucional del presidente Joseph Estrada después de que éste fue desfenestrado en 2001 de una manera no ortodoxa por el poder popular tras ser acusado de corrupción a gran escala. A pesar de que la Suprema Corte le otorgó legitimidad formal a la presidencia de Arroyo y fue reconocida por el Congreso y la comunidad internacional, ha sido desafiada por ciertos sectores de la comunidad política de Filipinas, muy especialmente por los más decididos partidarios de Estrada, entre los que se encuentran sus numerosos electores pobres.

Tras tres años de haber asumido la presidencia, Arroyo se enfrenta a una sociedad profundamente dividida, con retos alusivos a la legitimidad de su mandato y provenientes de poderosos actores que defienden sus propios intereses creados, como las familias de los ex presidentes Ferdinand Marcos y Joseph Estrada, de Eduardo Cojuangco, hijo, hombre de negocios y antiguo compinche de Marcos, de Pánfilo Lacson, ex jefe de la policía y actual senador, y de Gregorio Honasan, quien participó en el golpe de estado militar y actualmente es senador. La presidenta Arroyo ha intentado ganarse el apoyo de sus oponentes otorgándoles nombramientos y concesiones políticas, pero

al hacerlo ha alejado a sus partidarios, quienes la apoyaron en la coalición destinada a deponer a Estrada. Además, Arroyo ha gobernado Filipinas en medio de una desaceleración de la economía mundial y tras la crisis financiera asiática de 1997. Aunque en el país se han logrado avances económicos modestos durante los últimos años, el déficit presupuestal que asciende vertiginosamente ha limitado los planes para una expansión económica, y al mismo tiempo la inestabilidad política sigue ahuyentando a los inversores extranjeros.

El último reto de la presidenta Arroyo fue la crisis constitucional de noviembre entre los poderes judicial y legislativo; ésta fue provocada por el intento irreflexivo de procesar al presidente de la Suprema Corte promovido por una minoría de la Cámara de Representantes encabezada por dos hijos de Cojuangco y por otros vástagos jóvenes de dinastías políticas ricas pertenecientes al Partido de la Coalición Nacionalista del Pueblo (NPC, por sus siglas en inglés) de Cojuangco. A pesar de los argumentos legales de ambos bandos, el asunto quedó reducido a una política torpe. Aunque una resolución oportuna de la Suprema Corte impidió la crisis, las presiones remanentes pueden resurgir para polarizar todavía más al país durante las elecciones generales de 2004.

#### ASPECTOS SOCIOPOLÍTICOS

##### **Elecciones de 2004**

La presidenta Arroyo sorprendió a la mayor parte de los filipinos con su discurso del Día de Rizal, el 30 de diciembre de 2002, cuando manifestó que no contendría por la presidencia en las elecciones del 10 de mayo de 2004. La declaración resultó desconcertante a causa de que ningún presidente filipino había dejado el poder voluntariamente: han muerto en el poder, han sido depuestos, o han agotado las posibilidades de ser reelectos cuando la norma era que gobernarán durante periodos de cuatro años con posibilidades de reelegirse. (La Constitución de 1987 cambió el periodo presidencial a seis años sin posibilidades de reelección.) La Suprema Corte determinó que como la presidenta Arroyo solamente está completando el periodo faltante de Estrada, legalmente puede ser elegida para un periodo completo de seis años en 2004. La mayor parte de la gente esperaba que contendiera en las elecciones y que obtuviera el mandato del que carecía cuando sustituyó a Estrada.

La presidenta Arroyo demandó en su discurso un “sacrificio personal” de todos los filipinos y afirmó que no contendría en las próximas elecciones a fin de evitar mayores disensiones políticas en el país.<sup>1</sup> Además, para el tiempo que resta de su administración, que termina el 30 de junio de 2004, expresó que deseaba concentrarse en el fortalecimiento de la economía combatiendo el desempleo y la corrupción y trabajando para que las elecciones de mayo fueran limpias. Su anuncio fue recibido con amplia aprobación, aunque también con cierto escepticismo debido a que resulta difícil creer que renuncie a lo que seguramente ha constituido su ambición en la vida: ser electa presidenta, al igual que lo fue su padre, Diosdado Macapagal, quien asumió el cargo en 1961. Como candidata, Arroyo contaría con el poder y los recursos del gobierno, a pesar de que su ascensión a la presidencia ha sido la más controvertida en la historia de Filipinas. Además, su cercanía a los intermediarios del poder, como la Iglesia católica, la comunidad empresarial y el gobierno de Estados Unidos, le daría una ventaja sobre los otros aspirantes a la presidencia.

Con su decisión de no contender para las elecciones obtuvo una paz política inmediata, aunque temporal. En los primeros meses posteriores a su anuncio se le recibió cordialmente en todas partes y su popularidad, en descenso hasta entonces, mejoró. Los encabezados que predominaban en la prensa a principios de 2003 referentes al involucramiento en posibles escándalos de corrupción del secretario de justicia y del esposo de Arroyo pasaron rápidamente a un segundo plano opacados por las noticias concernientes a la presidenta. Tales controversias finalizaron con la renuncia del secretario de Justicia y con la extradición a Estados Unidos del congresista que había acusado al esposo de Arroyo de recibir un soborno por delitos cometidos anteriormente. En el ínterin la presidenta lanzó una campaña nacional de alto perfil contra el peculado. Formó el Grupo de Transparencia con sede en Malacañang (el palacio presidencial) y le asignó la tarea de llevar a cabo “verificaciones de los estilos de vida” de los funcionarios y empleados del gobierno, basándose en las declaraciones oficiales de sus bienes y de sus pasivos. Valiéndose de los medios y de las cortes, el Grupo de Transparencia asedió a aquellos funcionarios cuya forma de vida evidentemente no correspondía a sus ingresos.

<sup>1</sup> El texto completo del discurso del Día de Rizal que pronunció la presidenta Gloria Macapagal-Arroyo en la ciudad de Baguio se encuentra en “I Am Not Running in 2004”, *Philippine Daily Inquirer (PDI)*, 31 de diciembre de 2002, p. A3.

La corrupción en el gobierno es conocida ampliamente, en especial la concerniente a las oficinas de Aduanas y de Rentas Públicas, al Departamento de Obras Públicas y a las Fuerzas Armadas de Filipinas. En su índice de la percepción de la corrupción para 2003, Transparencia Internacional, con sede en Berlín, colocó a Filipinas en un lugar señero entre los países más corruptos del mundo, posición que ha empeorado año con año desde 2001.<sup>2</sup> El índice se basa en las percepciones de analistas empresariales y académicos sobre el grado de corrupción a que han llegado los funcionarios públicos y los políticos. En su informe de octubre el Banco Mundial, tras vincular la corrupción en los países pobres con causas estructurales, encontró que “entre más regulada esté una economía, existen mayores oportunidades para la corrupción y los costos para realizar negocios son más elevados”.<sup>3</sup> El informe cita a Filipinas como uno de nueve países, de 130 investigados, “que tienen mayores regulaciones para los negocios, lo que da como resultado una agobiante corrupción y un desempleo más elevado”.

En cuanto la presidenta Arroyo hizo su anuncio sorpresivo de que no contendría en las elecciones, sus aliados y sus oponentes políticos comenzaron a dar a conocer nuevos nombres para su posible sustituto. No obstante, para mediados de año ya había indicios de que la presidenta había cambiado de opinión. Un sondeo realizado en junio por la organización encuestadora Social Weather Stations mostró que Arroyo ganaría las elecciones si contendiera para la presidencia en ese momento. De los encuestados —en su mayoría de la clase media— 45% deseaba que contendiera en las elecciones.<sup>4</sup> Durante el mismo mes misteriosamente empezaron a aparecer numerosos anuncios espectaculares, banderas y carteles en la zona metropolitana de Manila que contenían consignas como “Contiende, Gloria, Contiende”, con la clara intención de pedir a la presidenta que buscara la reelección. Al poco tiempo los medios empezaron a informar que personajes influyentes como el ex presidente Fidel Ramos y el cardenal Jaime Sin, el recientemente retirado arzobispo de Manila, habían pedido a Arroyo que reconsiderara su decisión.

<sup>2</sup> Filipinas ocupó el lugar 92, rango similar a otros siete estados, entre ellos Pakistán y Argentina, de los 133 países analizados en el *Transparency International Corruption Perceptions Index 2003*, <http://www.transparency.org/cpi/2003/cpi2003.en.html>. Véase también Amando Doronila, “Perceptions of Corruption”, *PDI*, 15 de octubre de 2003, edición en internet. Los artículos del *PDI* pueden encontrarse en la sección de archivos de [www.inq7.net](http://www.inq7.net)

<sup>3</sup> *Idem*.

<sup>4</sup> Concepción Páez, “Run, Gloria, Run”, *Newsbreak*, 10 de noviembre de 2003, edición en internet. Los artículos de *Newsbreak* pueden encontrarse en [www.inq7.net/nwsbrk](http://www.inq7.net/nwsbrk).

También se mencionó que algunos dirigentes extranjeros como el primer ministro de Malasia Mahathir Mohamed, que posteriormente dejó su cargo, y el presidente de Estados Unidos George W. Bush, quien visitó Manila en octubre, alentaron a Arroyo para que se presentara a las elecciones. Incluso la agencia internacional Fitch Rating, que otorga el grado de crédito a los países, consideró que Filipinas “puede perder una ‘oportunidad única’ de continuar las reformas económicas y gubernamentales en caso de que Arroyo no contienda por un segundo periodo”.<sup>5</sup>

En septiembre continuaron las especulaciones generalizadas acerca del posible sucesor de Arroyo y especialmente sobre la posibilidad de que se arrepintiera de su decisión. Para algunos observadores tales especulaciones estaban creando percepciones de inestabilidad que hacían disminuir el valor de la moneda y ahuyentaban a inversores potenciales. Durante el mismo periodo el vicepresidente Teofisto Guingona hijo, y el senador Loren Legarda renunciaron a sus respectivos puestos de presidente y vicepresidente del Partido Demócratas Cristianos Musulmanes Lakas (Lakas-CMD, por sus siglas en inglés). Sus renunciaciones apuntan a una posible desintegración de la organización política de Arroyo denominada la Sunshine Coalition, la cual controla el Congreso mediante una tenue alianza con el NPC y el Partido Liberal. Finalmente el 4 de octubre la presidenta Arroyo manifestó que había diferido su “retiro” y que sí contendría en las elecciones de mayo, con la promesa de “acabar con las profundas divisiones de nuestra sociedad” y de centrarse en programas “destinados a fortalecer la economía, con la creación de más empleos y con el estímulo de la actividad comercial, la cual se dificulta por la corrupción y los numerosos trámites en el gobierno”.<sup>6</sup>

Para entonces el grado de aprobación hacia Arroyo había empezado a disminuir debido principalmente a las revelaciones que hicieran el senador Pánfilo Lacson en agosto acusando al esposo de la presidenta, José Miguel Arroyo, de desviar alrededor de 270 millones de pesos filipinos procedentes de contribuciones para la campaña de 1998 de su esposa. Dijo que colocó el dinero en cuentas secretas, entre las que había algunas a nombre de José Pidal.<sup>7</sup> Lacson también pretende contender por la presidencia en 2004 y a su

<sup>5</sup> *Idem*.

<sup>6</sup> Juliet Labog-Javellana, “Macapagal: I’m Running for President in 2004”, *PDI*, 4 de octubre de 2003, edición en internet.

<sup>7</sup> *PDI*, 21 de agosto de 2003, p. A6. A menos que se especifique lo contrario, todas las monedas utilizadas en el ensayo se refieren a pesos filipinos. El tipo de cambio, que ha fluctuado, se calcula en 55 pesos filipinos por 1 dólar estadounidense.

vez fue acusado de tener lazos con los sindicatos de drogas y de haber perpetrado otros delitos cuando se desempeñaba como jefe de la Policía Nacional de Filipinas durante la administración de Estrada. Los aliados de Arroyo afirman que las acusaciones de Lacson se deben a razones claramente políticas. Además, arguyen que las leyes filipinas no obligan a los candidatos a regresar las donaciones para las campañas que no se utilizaron, tal como sucede en Estados Unidos, por lo que no se ha cometido ningún delito (excepto tal vez infracciones fiscales). Sin embargo el daño a la credibilidad de la presidenta ya estaba hecho. Una encuesta entre 1 200 personas que fue realizada por Pulse Asia del 28 de agosto al 10 de septiembre reveló que Arroyo ya no era la opción popular para la presidencia: 49% dijo que no debería contender por la presidencia, 25% que sí, y el resto estaba indeciso.<sup>8</sup> Su margen de aprobación cayó de 51% en agosto a 41% en septiembre.

### **Riqueza mal habida**

En julio, dos decisiones inauditas de la Corte ofrecieron esperanzas a las víctimas de la ley marcial que operaba durante el gobierno del fallecido presidente Ferdinand Marcos. Primero el tribunal contra la corrupción de Sandiganbayan declaró que algunos compinches de Marcos, encabezados por el magnate empresarial Eduardo Cojuangco hijo, habían adquirido ilegalmente el United Coconut Planters Bank (UCPB) en 1975 con los fondos de las exacciones del coco, y agregó que las acciones del banco deberían ser decomisadas a favor del gobierno. Esta decisión fue tomada 19 meses después de que la Suprema Corte, en otra decisión sin precedentes, determinó que la controvertida recaudación de fondos del coco era “de carácter público”, con lo cual allanó el camino para que el tribunal de Sandiganbayan decidiera a quién pertenecían los bienes adquiridos con los fondos. La dictadura de Marcos había impuesto la recaudación a cerca de 1.3 millones de pequeños agricultores de coco entre 1973 y 1982 y había nombrado a Cojuangco administrador de los fondos. Actualmente se calcula que lo recaudado por el coco tiene un valor de entre 100 000 y 150 000 millones de pesos filipinos.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Páez, “Run, Gloria, Run”, *Newsbreak*, 10 de noviembre de 2003.

<sup>9</sup> Donna Pazzibugan y Gerald G. Lacuarta, “Raps vs. Danding Pushed”, *PDI*, 14 de julio de 2003, p. A19.

Esta decisión de Sandiganbayan podría tener un impacto potencial en el control administrativo de la Corporación San Miguel por parte de Cojuangco, uno de los mayores conglomerados de bebidas y alimentos del país, porque el UCPB controla 27% del capital de San Miguel. Después de que Marcos fue depuesto en 1986, el nuevo gobierno de la presidenta Corazón Aquino confiscó por medio de la Comisión Presidencial de Buen Gobierno (PCGG, por sus siglas en inglés) muchas de las corporaciones de la familia y los allegados del dictador. Pero cuando Joseph Estrada llegó a la presidencia en 1998 tras haber recibido un apoyo financiero sustancial de Cojuangco, este último obtuvo nuevamente el control de muchas compañías (entre ellas el UCPB y San Miguel) que había perdido cuando huyó al extranjero con Marcos en lo más álgido de la primera Revolución de EDSA. A partir de que Estrada fue depuesto en 2001 se ha debatido en la Corte el control de las compañías confiscadas. Cojuangco ha logrado que ocho de los nueve cargos por corrupción en su contra sean desechados ante el *ombudsman*, aunque, por decisión de la Suprema Corte, recientemente se han reabierto dos casos.

En septiembre Cojuangco obtuvo una pequeña victoria cuando el tribunal de Sandiganbayan con “bases procesales” levantó la orden de confiscación del gobierno sobre 20% de las acciones de San Miguel que él reclamaba. Esta decisión representó un revés para el gobierno a causa de que en realidad se le otorgó a Cojuangco el control de las acciones, las cuales incluyen 52% de la participación del gobierno en San Miguel. El momento en que se dio la decisión de la Corte, menos de tres semanas antes de que la presidenta Arroyo cambiara de opinión sobre su participación en las elecciones de 2004, ha dado lugar a que los observadores políticos se pregunten si tuvo lugar un trato relativo no sólo al apoyo de Cojuangco a Arroyo en las elecciones, sino también a su retiro como posible contendiente a la presidencia.<sup>10</sup> Cojuangco se había postulado anteriormente como candidato potencial, contando posiblemente con votantes entre los hombres de negocios y los profesionales. Su Coalición Nacionalista del Pueblo es el segundo partido más grande después de Lakas-CMD de Arroyo.

El segundo juicio sin precedentes es el relativo a la decisión de la Suprema Corte respecto a que 682 millones de dólares en cuentas congeladas en un banco de Suiza pertenecientes al fallecido dictador Marcos y a su familia (mantenidas en custodia en una cuenta del Banco Nacional Filipino a partir

<sup>10</sup> Amando Doronila, “The Stuff of Suspicion”, *PDI*, 10 de octubre de 2002, edición en internet.

de junio) eran “mal habidas” y, por lo tanto, pertenecían al gobierno. La decisión puso fin a la lucha legal del gobierno, que duró 17 años, por recobrar al menos una parte del dinero escondido por la familia Marcos y sus asociados en cuentas bancarias secretas operadas en el extranjero con el nombre de fundaciones ficticias y testaferros.

La ley de la reforma agraria establece que toda la riqueza mal habida de la familia Marcos y de sus allegados que se recobre será utilizada para financiar el programa de reforma agraria del gobierno. Sin embargo el Congreso debe enmendar la ley a fin de cumplir una condición de la Suprema Corte Federal de Suiza, la cual hace entrega del dinero con la condición de que sea usado para compensar a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos durante el régimen de Marcos. La enmienda está siendo obstruida en la cámara baja por el llamado “bloque ilocano” encabezado por la representante Imee Marcos, hija del fallecido dictador, quien desea incluir en el paquete compensatorio a las víctimas de los derechos humanos de todas las administraciones. De este modo no destacarían los abusos cometidos durante el régimen dictatorial de su padre.

### **Motín militar**

El 27 de julio alrededor de 300 hombres fuertemente armados procedentes de diversas divisiones de las Fuerzas Armadas de Filipinas tomaron el edificio Oakwood Premier, un lujoso complejo hotelero y de apartamentos ubicado junto a un elegante centro comercial que está en el corazón del distrito financiero de Makati. Los soldados rebeldes colocaron explosivos en el área circundante y se prepararon para aislar al gobierno, esperando que otras unidades de las fuerzas armadas y algunos grupos civiles se unieran a la rebelión. Cuando esto no sucedió, los jóvenes líderes rebeldes, disgustados —en su mayoría oficiales subalternos de las generaciones de 1994 y 1995 de la Academia Militar de Filipinas—, afirmaron que simplemente estaban “ventilando quejas en forma espontánea”, tales como la corrupción entre oficiales superiores, los salarios militares bajos y las malas condiciones de vida. Acusaron a sus superiores de coludirse con los insurgentes musulmanes de Mindanao, como por ejemplo en el caso de la venta de armas y municiones a estos grupos, hecho que ha sido corroborado por dirigentes del Frente Moro de Liberación Islámica, así como por un infante de marina que fue testigo del hecho, e incluso por Gracia Burnham, la misionera estadounidense sobrevi-

viene a un secuestro de un año a manos del grupo extremista musulmán Abu Sayyaf en 2002.<sup>11</sup>

Los amotinados pedían las renuncias del secretario de Defensa, del jefe de la Inteligencia Militar, del jefe de la Policía Nacional e incluso de la presidenta misma. También insistían en la adopción del Programa de Recuperación Nacional (NRP, por sus siglas en inglés), con un conjunto de consignas reformistas e idealistas, pero desarticuladas, elaboradas por el senador Gregorio Honasan, un ex oficial militar y líder de algunos intentos golpistas durante la década de 1980. Honasan ha presentado al NRP como plataforma política para su propuesta presidencial en 2004, pero al parecer carece de suficiente credibilidad y organización para tener éxito. No obstante, los soldados rebeldes fueron capaces de sacar provecho de la amplia cobertura de los medios en Oakwood y ganarse la simpatía del público, aunque no la necesaria para que otras personas se unieran a su levantamiento.

Dicha rebelión constituyó el primero de una serie de desafíos militares a la presidencia de Arroyo. Ella respondió con la declaración de estado de rebelión (del 28 de julio al 11 de agosto), y era la segunda vez que lo hacía; la primera tuvo lugar en mayo de 2001, cuando turbas que protestaban contra el arresto del depuesto presidente Estrada irrumpieron en el Palacio de Malacañang y estuvieron a punto de saquearlo. Aunque la toma durante 24 horas de Oakwood no representó un ataque a la sede del poder del Estado, y a pesar de que el motín fue suprimido finalmente sin violencia ni derramamiento de sangre, esto sirvió para confirmar la vieja percepción relativa a la debilidad del Estado filipino. Asimismo el motín confirmó la existencia de unas “fuerzas armadas politizadas” dispuestas a ignorar su subordinación constitucional al gobierno civil y a participar directamente en asuntos políticos. Resulta irónico que los militares desempeñaran un papel clave en el impulso de Arroyo hacia la presidencia en 2001 al retirar su apoyo a Estrada —quien había sido elegido popularmente— en respuesta al levantamiento conocido como el Segundo Poder del Pueblo.

La administración de Arroyo sostuvo que ya tenía noticias de las actividades de reclutamiento y de las reuniones de los soldados rebeldes meses antes de la toma del complejo de Oakwood, y que había estado inspeccionando

<sup>11</sup> James Hookway, “Genuine Grievances”, *Far Eastern Economic Review (FEER)*, 7 de agosto de 2003, p. 18; Christine O. Avendaño, “Officers to Talk on Arms Sales to MILF”, *PDI*, 12 de agosto de 2003, p. A2; Gracia Burnham y Dean Merrill, *In Presence of My Enemies*, Wheaton, Ill, Tyndale House Publishers, 2003.

los movimientos de las tropas a lo largo del país. En la investigación sobre el fallido motín, la información (obtenida básicamente de discos de computadora recobrados) reveló la existencia de un complot general y bien financiado, denominado “Plan de Campaña Andrés”, cuyo propósito era destituir a la presidenta Arroyo del poder e instaurar un Consejo Nacional de Recuperación compuesto por 15 miembros, el cual aplicaría el RNP de Honasan.<sup>12</sup> Sin embargo no quedaba claro cómo serían elegidos los miembros del consejo. Lo que sí se advertía era que no había nada de “espontáneo” (tal como afirmaron los dirigentes) en el elaborado plan: armamento complejo avanzado; moderno equipo de comunicaciones, la mayor parte del cual no era característico del ejército; arreglos logísticos para el transporte de las tropas y los costos de las habitaciones del hotel de Oakwood; así como mochilas importadas, uniformes nuevos y brazaletes rojos especiales que habían sido encargados desde junio. Al parecer el plan requería que en caso de que la conspiración fuera descubierta hubiera un repliegue en el distrito comercial de Makati.<sup>13</sup>

Resulta interesante que los amotinados se denominaran a sí mismos “el grupo de Magdalo”, referencia a la facción de las fuerzas revolucionarias de Katipunan encabezadas por el general Emilio Aguinaldo, quien liberó a Cavite (sur de Manila) del régimen colonial español a fines del siglo XIX. Tal facción organizó un “golpe” contra el grupo rival de Magdiwang que desembocó en la ejecución del comandante supremo de Katipunan Andrés Bonifacio en 1897. Tal vez como un presagio del fracaso del motín en Oakwood, los brazaletes rojos que usaron los soldados rebeldes de Magdalo se diseñaron siguiendo la bandera de Bonifacio.<sup>14</sup> Aun habiendo expresado sus acciones en términos seudonacionalistas, no se logró que los amotinados obtuvieran un apoyo generalizado en su intento de apropiarse del poder.

Algunas evidencias materiales recopiladas por el gobierno sobre la rebelión de Oakwood al parecer implican a la familia del ex presidente Estrada y a algunos de sus allegados cercanos. Por ejemplo, se descubrió que tres ca-

<sup>12</sup> Cynthia D. Balana, “Golez Says Rebels Planned 15-Man Junta”, *PDI*, 1 de agosto de 2003, pp. A1, A20.

<sup>13</sup> *PDI*, 15 de agosto de 2003, p. A18.

<sup>14</sup> El historiador Ambeth Ocampo advirtió la incongruente utilización de los símbolos históricos por parte de los soldados rebeldes: tomaron el nombre de Magdalo de la facción de Katipunan de Aguinaldo (Magdalo también era su *nom de guerre*), pero usaron como símbolo la bandera de Bonifacio, quien fue apoyado por la facción rival de Magdiwang. Véase Ambeth R. Ocampo, “Lost in Bits and Pieces”, *PDI*, 1 de agosto de 2003, p. A9.

sas que aparentemente usaron los soldados rebeldes para preparar el motín pertenecían a uno de sus hijos, a una amante de Estrada, y a un cercano ex miembro de su gabinete.<sup>15</sup> Algunos vehículos abandonados después de la fallida rebelión se vincularon con la senadora Luisa Ejército Estrada, la esposa del ex presidente. También se informó que unos días antes del motín un partidario importante de Estrada estaba incitando a algunos residentes de barrios pobres para que se congregaran en Makati o en la capilla de EDSA, un lugar de reunión común para mítines políticos.<sup>16</sup>

En el caso del senador Honasan, *affidávits* de algunos soldados, así como una parte de un corto de cine lo vinculan con reuniones de reclutamiento e incluso con rituales secretos para convertirse en miembros del grupo de Magdalo. El gobierno ha sostenido que la rebelión formaba parte de un intento, apoyado por civiles, de eliminar a la presidenta Arroyo y remplazarla con una junta encabezada por Honasan. Los oficiales rebeldes de Oakwood citaron el Programa Nacional de Recuperación de Honasan como su proyecto de reforma. La decisión de éste de pasar a la “clandestinidad” durante un mes después de que se suprimió el motín aumentó las sospechas de que estaba involucrado en la planeación de la revuelta. En cualquier caso, su credibilidad política y sus aspiraciones presidenciales pueden haber quedado irreparablemente dañadas.

Un intento de golpe siempre produce incertidumbre política y económica y consecuentemente entorpece el crecimiento y la recuperación económica. La rebelión de julio creó un estado de incertidumbre y de volatilidad política que pudo haber sido agravado por las especulaciones descabelladas acerca del liderazgo poselectoral de Arroyo (en ese tiempo la presidenta aún no había tomado la decisión de contender). Aunque el motín de Oakwood fue menos dañino para la economía que los intentos de golpe anteriores, alentó las dudas de la comunidad empresarial sobre la capacidad del gobierno para garantizar la estabilidad política y controlar los desafíos armados. El restablecimiento de la confianza en el poder del gobierno para sofocar rebeliones futuras dependerá de que éste logre evitar futuras acciones subversivas de conspiradores militares y civiles sometiendo a un trato justo pero firme a quienes participaron en el golpe y fueron capturados, y ocupándose de las causas fundamentales del descontento legítimo de los soldados rasos.

<sup>15</sup> T. J. Burgonio y Luige del Puerto, “Receipts Lead to Jingly Office”, *PDI*, 2 de agosto de 2003, pp. A17 y A18.

<sup>16</sup> Volt Contreras, “Erap Man Seen Rousing Slum Folk to Aida Rebels”, *PDI*, 3 de agosto de 2003, p. A19.

A raíz del motín de Oakwood la presidenta Arroyo recibió altos grados de aprobación del público. Una encuesta realizada por Pulse Asia en agosto reveló que la población de las diversas regiones geográficas y de diferentes clases socioeconómicas aprobó su respuesta firme contra el golpe y la resolución “rápida y pacífica” de la crisis de Oakwood.<sup>17</sup> En un intento de proteger su acosada administración de nuevos ataques de sus rivales, sustituyó al jefe de Inteligencia Militar y al secretario de Defensa —dos de los funcionarios cuya renuncia pedían los amotinados—. Al mismo tiempo autorizó la liberación de decenas de soldados rebeldes después de que se supo que habían sido “engañados u obligados a formar parte de la rebelión o que simplemente habían sido implicados sin haber tomado parte”.<sup>18</sup> Sin embargo Arroyo, a diferencia del pasado, cuando se castigaba a los conspiradores obligándolos solamente a hacer 100 “largartijas”, parece decidida a mantener en prisión a los oficiales rebeldes y a algunos de sus patrocinadores civiles y responsables de acciones delictivas. Además, en el área metropolitana de Manila se ha reactivado una fuerza militar de 6 000 hombres para combatir los golpes, y especialmente con el objeto de defender la capital de amenazas violentas procedentes de soldados rebeldes, terroristas y participantes en otras formas de insurgencia. Se llevó a cabo un reagrupamiento de fuerzas en noviembre, pocos días después de que dos hombres fuertemente armados tomaron la torre de control de tráfico aéreo del aeropuerto internacional de Manila y fueron ejecutados por fuerzas especiales.

### **Crisis constitucional**

Apenas tres meses después del fallido motín militar tuvo lugar otra grave crisis en el país, esta vez referente a los poderes Legislativo y Judicial. En octubre la Cámara de Representantes, encabezada por un bloque asociado con el hombre de negocios Eduardo Cojuangco hijo y su partido NPC, logró que más del tercio requerido de sus miembros firmara una solicitud de enjuiciamiento político sin precedentes en contra del presidente de la Suprema Cor-

<sup>17</sup> Amando Doronila, “GMA’s Political Gains from Oakwood”, *PDI*, 27 de agosto de 2003, p. A9.

<sup>18</sup> Gil C. Cabacungan, Jr., “GMA Orders Release of 30 Mutineers”, *PDI*, 26 de agosto de 2003, p. A4; Volt Contreras, “26 Magdalo Recruits to Tag Gringo, Says Lina”, *PDI*, 27 de agosto de 2003, p. A2; Michael Lim Ubac, “Mutineers Misled, Shortchanged, Probers Told”, *PDI*, 29 de agosto de 2003, p. A4.

te, Hilario Davide hijo. Las bases constitucionales para un enjuiciamiento político en Filipinas son: “violación culpable de la Constitución, traición, soborno, dinero mal habido y corrupción, otros delitos graves, o la traición de la confianza pública”.<sup>19</sup> En la denuncia se alegaban irregularidades en el gasto del Fondo de Desarrollo de la Judicatura, a pesar de que la Comisión de Verificación Contable no había encontrado ninguna irregularidad. Este caso tuvo lugar poco después de que se desechó una medida anterior de enjuiciamiento político iniciada por partidarios del ex presidente Estrada en la cámara baja. En dicha solicitud se acusaba a Davide y a otros siete jueces de haber intervenido cuando designaron presidenta a la entonces vicepresidenta Arroyo después de la destitución de Estrada y, posteriormente, cuando confirmaron la legitimidad del ascenso al poder de Arroyo.

Para los observadores políticos, detrás de esta medida había una “confluencia de motivos” de los grupos de Cojuangco, de los ex presidentes Marcos y Estrada, y del senador Pánfilo Lacson.<sup>20</sup> Sea por venganza o intimidación, la demanda de enjuiciamiento político contra Davide al parecer estaba vinculada a las decisiones de la Suprema Corte contra Cojuangco por los casos de impuestos del coco; contra la familia de Marcos por la transferencia de los depósitos bancarios suizos a favor del gobierno; contra Estrada por haber legitimado la presidencia de Arroyo; y contra Lacson por la decisión de la Corte de reabrir el caso de Kuratong Baleleng, en el cual Lacson, como jefe de la Policía Nacional de Filipinas durante la presidencia de Estrada, estuvo implicado en la ejecución sumaria de miembros de una pandilla que se encontraba bajo la custodia de la policía.

La demanda planteó dos principios constitucionales opuestos: la autoridad del Legislativo para verificar el gasto de los fondos públicos, y la autonomía de la judicatura que impedía la injerencia del Congreso en la forma en que gasta su presupuesto. Al defender a la Suprema Corte, Davide dijo que la demanda constituyó “una violación sin precedentes de la doctrina de la separación de poderes, un ataque a la independencia judicial y un denuesto de las reglas sobre la investigación en pro de la legislación”.<sup>21</sup> Además, citó la cláusula constitucional que establece que “no se podrá iniciar un procedimiento

<sup>19</sup> Sec. 2, art. 11: Accountability of Public Officers, *Constitution of the Philippines* (1987).

<sup>20</sup> Belinda Olivares-Cunanan, “Confluence of Motives”, *PDI*, 25 de octubre de 2003, edición en internet, “Attacking the Courts”, artículo de fondo, *PDI*, 27 de octubre de 2003, edición en internet.

<sup>21</sup> Amando Doronila, “Congress, Supreme Court on Collision Course”, *PDI*, 27 de octubre de 2003, edición en internet.

de enjuiciamiento contra el mismo funcionario más de una vez en el periodo de un año".<sup>22</sup> Uno de los artífices de la Constitución aclaró que esta última cláusula tenía precisamente el propósito de constituir una salvaguarda frente al hostigamiento político.<sup>23</sup>

A medida que aumentaba la tensión, grupos de ciudadanos, asociaciones de abogados y jueces de todo el país empezaron a unirse para apoyar a Davide, al mismo tiempo que los partidarios del NPC y los leales a Estrada hacían campaña a favor del enjuiciamiento político. La ex presidenta Aquino, el cardenal Sin, la juez retirada de la Suprema Corte Cecilia Muñoz Palma y la mayor parte de las organizaciones no gubernamentales que participaron en los movimientos pasados del poder del pueblo se unieron contra la denuncia de juicio político contra Davide, uno de los presidentes de la Suprema Corte más reformistas del país. Inicialmente la presidenta Arroyo se declaró neutral sobre el tema, afirmando que respetaba el principio de separación de poderes. Sin embargo los observadores recordaron su posición no comprometida durante los primeros días del movimiento que pedía la renuncia del presidente Estrada en 2000; sólo se unió en el último minuto, cuando la destitución de Estrada era inevitable. Algunos políticos han criticado su error como cabeza del partido gobernante al no ejercer su influencia sobre los legisladores para evitar esta crisis.

Ésta es la primera vez en la historia de Filipinas en que un presidente de la Suprema Corte ha sido enjuiciado, lo cual tuvo lugar después del proceso de Estrada, que se realizó hace menos de tres años y constituyó el primer juicio de un presidente filipino en el Senado. Estos acontecimientos revelan el uso cada vez más arbitrario de los instrumentos constitucionales, destinados originalmente a proporcionar frenos y equilibrios al poder y a la autoridad. El éxito que logró el primer movimiento del poder popular al destituir a Marcos en 1986 puede haber expuesto irrevocablemente la vulnerabilidad del Estado al cambio de régimen por medios extralegales.

En noviembre la Suprema Corte, durante una larga sesión, determinó con la recusación de Davide que la demanda de enjuiciamiento del presidente de la Suprema Corte era anticonstitucional porque constituía el segundo

<sup>22</sup> Núm. 5, sec. 3, art. 11: Responsabilidades de los Funcionarios Públicos, *Constitution of the Philippines* (1987).

<sup>23</sup> Fray Joaquim Bernas, S. J., miembro de la Comisión Constitucional de 1986, testificó ante la Suprema Corte que esto es lo que tenían en mente los artífices de la Constitución cuando incluyeron esta estipulación. Véase "Attacking the Courts", artículo de fondo, *PDI*, 27 de octubre de 2003, edición en internet.

caso iniciado contra Davide en el lapso de un año. Además, consideró que la Suprema Corte tenía la autoridad (en realidad, el deber) de tomar tal decisión como árbitro definitivo del conflicto constitucional. Por otra parte la cámara baja, con la consolidación final del partido en el poder Lakas-CMD, votó a favor de la decisión de la Suprema Corte, evitando así lo que se podría haber convertido en una crisis constitucional catastrófica.

#### CUESTIONES DE SEGURIDAD

##### **Fuga de un terrorista**

En julio escaparon el militante indonesio Fathur Rohman al-Ghozi y otros dos miembros del grupo extremista musulmán de Filipinas Abu Sayyaf de un centro penitenciario de máxima seguridad en el área metropolitana de Manila. Al-Ghozi, que confesó haber sido el actor intelectual de los bombazos de Manila el Día de Rizal en 2000, desde 2002 estaba cumpliendo una condena de 12 años de prisión por posesión ilegal de explosivos. Se cree que participó como experto en demoliciones en Jemaah Islamiyah, un grupo regional clandestino que se supone está vinculado con la red Al-Qaeda de Osama bin Laden. La fuga representó un duro golpe para la administración de Arroyo no sólo porque sucedió en Camp Crame, los cuarteles principales de la Policía Nacional de Filipinas (PNP, por sus siglas en inglés), sino porque aconteció el día en que el primer ministro John Howard de Australia estaba en Manila en visita de Estado con el propósito de fomentar la cooperación antiterrorista.

Hubo especulaciones de que los tres convictos habían comprado su camino hacia la libertad, a pesar de que una comisión investigadora determinó que “no había habido intercambio de dinero” y que la negligencia, la seguridad laxa y las cerraduras defectuosas de las celdas habían permitido el escape.<sup>24</sup> Hubo fuertes protestas públicas para que Hermogenes Ebdane hijo renunciara como director general de la PNP, en cuya gestión habían escapado al menos otros dos delincuentes notables. Aunque la comisión encontró que hubo intentos deliberados por parte de oficiales de la PNF para encubrir las circunstancias de la huida, y a pesar de que Ebdane informó a la presidenta

<sup>24</sup> Juliet Labog-Javellana, “No Proof of Al-Ghozi Collusion with Jailers”, *PDI*, 28 de agosto de 2003, p. A2.

de la fuga de al-Ghozi 10 horas después de que sucedió, Arroyo retuvo a Ebadne en su puesto y además le asignó la responsabilidad de recapturar a los tres prófugos.

En agosto fue arrestado en Lanao del Norte Abdulmukin Edris, uno de los dos bandidos de Abu Sayyaf que escaparon con al-Ghozi, quien estaba con un supuesto dirigente del Frente Moro de Liberación Islámica. Ambos fueron muertos a tiros cuando, según se informó, trataban de huir. En octubre fue asesinado al-Ghozi, según se dijo, durante un tiroteo con la policía en Cotabato del Norte, con lo que se acabaron una búsqueda sistemática y cualquier posibilidad de descubrir las circunstancias verdaderas de su temerario escape. El tiroteo y la muerte de al-Ghozi ocurrieron en un momento propicio, que favoreció a la administración de Arroyo, ya que sucedió menos de una semana antes de que el presidente George W. Bush hiciera una breve visita de Estado a Filipinas, y recibió amplia publicidad.

### **Rebelión musulmana**

En septiembre el Frente Moro de Liberación Islámica (MILF, por sus siglas en inglés), el mayor grupo separatista del país, comenzó “pláticas exploratorias” con la administración de Arroyo en Kuala Lumpur, Malasia, a fin de tratar de revivir las negociaciones de paz que se estancaron en 2001 a causa de violentos choques entre el MILF y las fuerzas gubernamentales en Mindanao. El gobierno de Malasia se ha ofrecido como intermediario de las pláticas, las cuales pretenden poner fin a más de tres décadas de lucha armada musulmana cuyo afán es crear un gobierno autónomo en el sur de Filipinas.

En febrero se interrumpió un precario cese al fuego cuando los militares lanzaron ataques aéreos y terrestres sobre áreas identificadas como pertenecientes al MILF en Cotabato del Norte, y esto dio como resultado que alrededor de 45 000 residentes locales huyeran a campos de evacuación. En marzo los terroristas contestaron la ofensiva con una serie de ataques: se colocaron bombas en el aeropuerto de la ciudad de Davao —murieron 22 personas—, en una central eléctrica y en varias torres de transmisión. El MILF ha negado su responsabilidad en estos bombazos; argumenta que no es un grupo terrorista sino una organización revolucionaria legítima.

Los militares sostienen que los comandantes locales del MILF han permitido que reclutas de Jemaah Islamiah (JI) procedentes de Indonesia y Malasia

se entrenen en áreas que están bajo su control.<sup>25</sup> Se afirma que JI es una organización clandestina del Sureste de Asia que intenta crear un estado panislámico que se extienda a Indonesia, Malasia, Singapur y el sur de Filipinas. En la década de 1990 cientos de militantes musulmanes de países vecinos penetraban subrepticamente a Filipinas en barcos cruzando por las fronteras sin vigilancia a fin de entrenar en Camp Abubakar del MILF, lugar que finalmente fue tomado por las fuerzas del gobierno en 2000.

En junio el MILF declaró un cese al fuego unilateral con la esperanza de que el gobierno hiciera lo propio y se reiniciaran las pláticas de paz. Poco después el presidente del MILF, Hashim Salamat, declaró que renunciaba formalmente al terrorismo para cumplir con una de las demandas clave del gobierno. Incluso el MILF ofreció ayudar al gobierno en la búsqueda de al-Ghozi, el convicto indonesio prófugo. A petición de Malasia la presidenta Arroyo levantó en julio las órdenes de aprehensión contra los principales dirigentes del MILF y así les permitió que viajaran a Malasia para asistir a las pláticas preliminares. El proceso de paz sufrió un pequeño retraso cuando el respetado jefe del MILF Hashim Salamat murió de un ataque al corazón a mediados de julio. Las noticias de su muerte no se hicieron públicas hasta que el MILF había completado su reorganización. Murad Ebrahim, uno de los fundadores originales del MILF, quien había sido vicepresidente de asuntos militares, es el nuevo presidente del MILF. Se le considera moderado y se espera que continúe con las iniciativas de paz de su predecesor.

A manera de incentivo, el gobierno de Estados Unidos ha prometido entregar 30 millones de dólares en 2003 para el desarrollo de Mindanao, otros 20 millones de dólares en 2004, y posiblemente una suma mayor en los años posteriores una vez que el gobierno y el MILF hayan firmado un acuerdo de paz. Dichos fondos son adicionales a los 74 millones de dólares que se entregaron a Filipinas en 2003 a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, de los cuales más de la mitad se ha destinado a proyectos en Mindanao. El gobierno de Estados Unidos desea entregar a los rebeldes del MILF un paquete de ayuda similar al que suministró al Frente Moro de Liberación Nacional (la segunda fuerza musulmana rebelde de Filipinas) cuando firmó un acuerdo de paz con el gobierno en 1996.

<sup>25</sup> Alan Sipress y Ellen Nakashima, "Al-Qaeda Affiliate Training Indonesians in Philippine Island", *Washington Post*, 17 de noviembre de 2003, p. A18, edición en internet, en archivos de [www.washingtonpost.com](http://www.washingtonpost.com); James Hookway, "A Local War No Moore", *Far Eastern Economic Review (FEER)*, 12 de junio de 2003, p. 15.

El Grupo Abu Sayyaf (ASG, por sus siglas en inglés), al cual el gobierno de Estados Unidos ha puesto en la lista negra de organizaciones terroristas y que se afirma que tiene vínculos con Al-Qaeda, continúa atribuyéndose ataques violentos esporádicos en Mindanao, aunque no se ha podido verificar su autoría en tales atentados. Sus principales dirigentes no han sido capturados a pesar de que el gobierno de Estados Unidos ha ofrecido gratificaciones de 5 millones de dólares por su arresto en relación con el secuestro de ciudadanos estadounidenses. Se dice que muchos de los comandantes del ASG huyeron a Jolo, Sulu, después de severas operaciones militares en su base original de la isla de Basilan. Las fuerzas armadas han calculado que actualmente colaboran con el ASG de 100 a 400 hombres diseminados en las provincias de Basilan, Zamboanga y Sulu, todas ellas situadas en Mindanao.<sup>26</sup>

En el interin, 300 militares estadounidenses entrenaron a soldados filipinos en tácticas antiterroristas en Zamboanga durante la primera mitad del año. El gobierno de Estados Unidos propuso enviar 3 000 soldados más de combate para reforzar la lucha contra el ASG en Sulu, pero el plan fue abandonado porque la Constitución filipina prohíbe que tropas extranjeras participen en batallas en su suelo.

### **Insurgencia comunista**

En los últimos tres años el Nuevo Ejército del Pueblo (NPA, por sus siglas en inglés), el ala militar del Partido Comunista de Filipinas (CPP, por sus siglas en inglés), ha utilizado un patrón más agresivo de ataques, de emboscadas y de asesinatos en todo el país, en ocasiones contra blancos civiles. Los rebeldes del NPA, que actúan en ciertas áreas del país, también han revisado sus tácticas de guerrillas y envían tropas cada vez mayores a atacar campos con pocas guarniciones, a desvalijar armerías y a destruir destacamentos de las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP, por sus siglas en inglés). Este acrecentamiento de las actividades comunistas al parecer contradice la aseveración de los militares de que las fuerzas del CPP-NPA están en decadencia.

A petición del gobierno filipino, en 2002 Estados Unidos, Australia, Canadá y los 15 miembros de la Unión Europea (UE) declararon que tanto el CPP como el NPA eran “organizaciones terroristas”. Como tales, sus cuentas

<sup>26</sup> T. J. Burgonio y Aquiles Z. Zonio, “Abu Bandit Slain as Troops Press Hunt for Janjalani”, *PDI*, 11 de julio de 2003, p. A2.

bancarias y sus propiedades en Estados Unidos y Europa se han congelado (algunos dirigentes del CPP han vivido en el exilio en Holanda durante quince años).<sup>27</sup> Esta medida tenía el propósito de obligar al Frente Nacional Democrático, la organización comunista que le sirve de paraguas, a reiniciar las negociaciones formales de paz con el gobierno, aunque puede haber producido el efecto contrario.

Las guerrillas del NPA se han vuelto más enérgicas en la recaudación de los “impuestos revolucionarios” que extraen de los negocios locales y de propietarios extranjeros y, según se informa, obtienen ganancias equivalentes a 5.6 millones de dólares anuales.<sup>28</sup> Aunque el NPA generalmente no pide más de lo que sus víctimas pueden aportar, como represalia contra los que se niegan a satisfacer sus demandas los rebeldes han recurrido a incendiar equipos de granjas, camiones cargados de madera, aplanadoras, generadores, autobuses y transmisoras de teléfonos celulares, con lo que socavan el desarrollo rural y ahuyentan a los inversionistas locales y extranjeros. Los rebeldes también han amenazado al personal militar de Estados Unidos estacionado en el país para realizar ejercicios de entrenamiento. En una fechoría que recibió amplia publicidad, el NPA se atribuyó haber volado el famoso busto del ex presidente Marcos de 30 metros de alto que se encontraba en el norte de Filipinas.

Los militares calculan que actualmente el NPA cuenta con 10 000 guerrillas totalmente armadas distribuidas en el país, cifra inferior a las 25 000 que tenía a mediados de la década de 1980, cuando el movimiento contra Marcos estaba en su apogeo, pero superior a las 6 000 con que contaba hace apenas tres años.<sup>29</sup> A pesar de que el CPP-NPA se ha debilitado a lo largo de los años por las amnistías gubernamentales, las ofensivas militares, las rendiciones y las purgas internas, aún continúa participando en la lucha armada y constituye la mayor insurgencia comunista en el mundo.<sup>30</sup> La extrema pobreza y la corrupción generalizada de los años recientes han facilitado el reclutamiento de sus miembros.

Después de la dictadura de Marcos muchos miembros del CPP-NPA abandonaron la clandestinidad para participar en la sociedad como trabajadores sociales, académicos, activistas de organizaciones no gubernamentales e inclu-

<sup>27</sup> James Hookway, “The Business of Terrorism”, *FEER*, 16 de enero de 2003, p. 52.

<sup>28</sup> *Ibid.*, p. 50.

<sup>29</sup> *Ibid.*, p. 52.

<sup>30</sup> Seth Mydans, “Communist Revolt is Alive, and Active, in the Philippines”, *New York Times*, 26 de marzo de 2003, p. A3.

so como funcionarios del gobierno. En 2002 tres representantes de un partido político de orientación marxista, Bayan Muna, fueron elegidos miembros del Congreso por primera vez desde 1946 gracias a la ley de la Lista de Partidos. Se espera que el CPP y sus organizaciones afiliadas, al mismo tiempo que intensifican su lucha armada en el campo, presenten más candidatos para la lista de partidos en las elecciones de 2004 a fin de promover su “movimiento democrático legal” en las áreas urbanas.

#### TEMAS ECONÓMICOS

##### **Galanteo a los filipinos de ultramar**

En febrero, en medio de grandes fanfarrias políticas, el Acta de Votación de los Ausentes en el Extranjero se convirtió en ley. Dicha ley permite a los ciudadanos filipinos que han emigrado a otros países que voten en las elecciones de su país siempre y cuando prometan regresar en forma permanente dentro de un periodo de tres años después de haber ejercido tal privilegio. Los partidarios de dicha ley consideran que es una autorización destinada a recompensar a los trabajadores filipinos en el extranjero, quienes mantienen a sus familias y la economía familiar con remesas que ascendieron a 7 200 millones de dólares en 2002.

No obstante, los críticos afirman que el voto de los ausentes sólo será aplicable a las personas que posean la ciudadanía, la edad y las calificaciones de residencia requeridas por la Constitución, y no a los filipinos que viven en forma permanente en otro lugar.<sup>31</sup> Arguyen que si la Suprema Corte ha descalificado a quienes poseen un carnet de residencia en Estados Unidos para desempeñar un cargo público en Filipinas por carecer de los requerimientos de residencia en este país, ¿por qué se permitiría votar en las elecciones a los filipinos que residen permanentemente en el extranjero?<sup>32</sup> Además ponen en duda la capacidad del gobierno para hacer cumplir el juramento de que estos migrantes regresarán a Filipinas en los tres años siguientes a la votación.

<sup>31</sup> La sec. 1, art. 5 de la Constitución establece: “El sufragio puede ser ejercido por todos los ciudadanos de Filipinas que no estén descalificados por la ley, que tengan al menos 18 años de edad y que hayan residido por lo menos durante un año en Filipinas y en el lugar donde pretendan votar al menos seis meses antes de las elecciones”.

<sup>32</sup> Isagani A. Cruz, “Misreading the Constitution”, *PDI*, 20 de julio de 2003, p. A6.

La Comisión de las Elecciones informó que sólo 10 000 de los 8 millones de filipinos que se calcula que viven en el extranjero se habían registrado hasta agosto para las elecciones de 2004. Algunas organizaciones filipinas del extranjero expresaron que sus miembros no estaban dispuestos a registrarse como votantes ausentes a causa del requisito de regresar dentro de tres años. Además, conforme a la ley los filipinos en el extranjero deben registrarse y llenar las boletas de votación personalmente en la embajada o el consulado de Filipinas en el país donde residan, lo que ocasiona inconvenientes adicionales y gastos a quienes viven lejos de estas oficinas diplomáticas.

Otra medida firmada por la presidenta Arroyo en agosto que favorece a los filipinos en el extranjero es la Ley de Ciudadanía Dual, que permite a los filipinos por nacimiento que se han naturalizado ciudadanos de otro país adquirir nuevamente su ciudadanía original mediante un juramento de lealtad. Sus hijos menores de 18 años también serán considerados ciudadanos filipinos. A los que adquieran nuevamente la ciudadanía filipina se les permitirá votar u obtener cargos públicos, a menos que sean candidatos a un cargo público o ya lo desempeñen en el país en donde se hayan naturalizado, o en caso de que estén en servicio activo en las fuerzas armadas de ese país. La nueva ley también permite que los filipinos que vivan en el extranjero vuelvan a tener derecho a comprar terrenos en Filipinas e invertir en áreas previamente restringidas para los residentes locales.

Los legisladores tienen esperanzas de que ambas leyes alienten a los migrantes filipinos a regresar e invertir en el país, con lo que se contribuirá a resucitar la vacilante economía nacional. La administración de Arroyo considera fuente potencial de inversión a los 2.5 millones de filipinos que viven en Estados Unidos, los cuales en conjunto obtienen un ingreso de 175 millones de dólares, casi el doble del ingreso total de 100 millones de dólares que recibe la población filipina actualmente, que se calcula en 80 millones.<sup>33</sup>

Habiendo descubierto el negocio lucrativo de la exportación de mano de obra, el gobierno filipino vigila cuidadosamente a los trabajadores que van al extranjero, a las personas que los reclutan y al dinero que cambia de manos entre los contratos que se realizan entre ellos. Se estima que a fines de 2003 el monto enviado por los trabajadores filipinos en el extranjero ascenderá a

<sup>33</sup> Gil C. Cabacungan hijo, "GMA Signs Dual Citizenship Law", *PDI*, 30 de agosto de 2003, p. A7.

7 600 millones de dólares. La suma de las remesas disminuyó en los primeros meses del año, cuando los prospectos de trabajo en el extranjero se volvieron menos atractivos a causa de la incertidumbre provocada por la guerra entre Estados Unidos e Irak y debido al brote del virus del llamado síndrome respiratorio agudo. De acuerdo con el departamento de trabajo, a pesar de que han disminuido estas preocupaciones el desplazamiento de trabajadores ha seguido siendo flojo comparado con el de 2002. La disminución afectó principalmente a los de bajos ingresos, como son los empleados domésticos, mientras que el número de los que reciben altos salarios (ingenieros, artistas, empleados de la salud, etc.) aumentó. El gobierno tiene la intención de enviar un millón de filipinos para que se empleen en el extranjero en 2003, superando los 892 000 de 2002.

El Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP, el Banco Central) cuenta con que en 2003 habrá mayores remesas de los trabajadores en el extranjero, lo que compensará la disminución de la inversión extranjera directa y las débiles exportaciones, además de que ayudará a mejorar el tipo de cambio de 54 pesos filipinos por un dólar para fin de año. Las remesas en dólares generalmente aumentan a fin de año a causa de que los filipinos envían dinero a sus familias para que sufraguen las matrículas escolares y los gastos navideños. Además, el BSP reveló que los trabajadores en el extranjero envían al país más de 5 000 millones de dólares por canales informales (esto es, mensajeros, cambistas) que el gobierno no tiene manera de investigar.<sup>34</sup>

### **Déficit presupuestal**

El aumento de la recaudación de ingresos este año ha ayudado al gobierno a reducir su déficit presupuestal a 163 880 millones de pesos filipinos (enero-octubre), o 4.7% menos del límite programado. El gobierno, que espera resultados similares para el resto del año, es optimista en cumplir con su déficit planeado de 202 000 millones de pesos filipinos en 2003. En 2002 no pudo lograr la meta de 130 000 millones de pesos filipinos básicamente a causa de la débil recaudación de ingresos. Esto dio como resultado que el déficit aumentara a 210 700 millones de pesos filipinos, por lo que la agencia internacional Standard and Poor, que otorga los grados de crédito de los países, bajó el

<sup>34</sup> Clarissa S. Batino, "Jan.-Sept. OFW Remittances Up 5% to \$5.7B", *PDI*, 14 de noviembre de 2003, edición en internet.

grado de Filipinas. La brecha fiscal ha obligado al gobierno a pedir préstamos al extranjero, con lo que la deuda pública ha aumentado para representar alrededor de 85% del producto interno bruto. Este elevado porcentaje reduce fondos que son vitales para satisfacer las prioridades sociales y sufragar el desarrollo económico. En el presupuesto de 2003 se destinó al servicio de la deuda 28.4%, mientras que sólo 20% se dedicó a los servicios económicos y 29.2% a servicios sociales.<sup>35</sup> A algunos analistas les preocupa que el dinero destinado a la preparación de las elecciones pueda aumentar los gastos.

La presidenta Arroyo seleccionó al jefe de aduanas Guillermo Parayno para que encabezara la oficina de Ingresos Internos, y esto ha tenido un efecto positivo. Dicho funcionario ha aplicado varias reformas administrativas, entre ellas una cuidadosa auditoría de las operaciones, la organización de la recaudación de impuestos y la computarización de la recaudación de impuestos a fin de acelerar el proceso. Esta oficina y la de aduanas contribuyen con más de 90% de los ingresos anuales del gobierno; sin embargo en agosto el jefe de aduanas y cuatro de sus asistentes presentaron sus renuncias a la presidenta Arroyo como protesta por las nuevas “verificaciones del estilo de vida” de los empleados de la oficina. Sostuvieron que las acusaciones generalizadas de corrupción y la crítica provocada por la publicidad, junto con las verificaciones indiscriminadas, estaban produciendo desmoralización y retrasos en la oficina de recaudación. Arroyo estuvo de acuerdo en emitir pautas más claras para las verificaciones del estilo de vida.

### **Crecimiento económico modesto**

Algunos economistas y hombres de negocios siguen siendo cautelosamente optimistas respecto a una recuperación económica.<sup>36</sup> De acuerdo con la nueva secretaria de planeación socioeconómica, el PIB del país crecerá al menos 4.2% (la meta oficial es entre 4.2 y 4.8%), con una recuperación del sector agrícola de la sequía causada por *El Niño*. En septiembre las exportaciones empezaron a recuperarse 2.3%, después de haber disminuido 7.9 y 2.1% en julio y agosto respectivamente. Los productos electrónicos, que constitu-

<sup>35</sup> Dennis M. Arroyo, “Academe’s View of RP Economy”, *PDI*, 4 de agosto de 2003, p. B4.

<sup>36</sup> *Ibid.*, pp. B2 y B4, “This Week: Philippines”, *FEER*, 16 de octubre de 2003, p. 17.

yen más de 60% de todas las exportaciones, experimentaron un modesto ascenso de 0.9% en septiembre, después de haberse contraído en julio y en agosto. La industria de semiconductores y productos electrónicos estima que sus exportaciones tendrán incrementos en el último trimestre del año, cuando la economía global mejore.

Se calcula que la inflación permanecerá en 3.1% en 2003, proporción similar al promedio del año anterior y por abajo del límite del gobierno de 4.5 a 5.5%. La administración de Arroyo aseguró a la población que los precios de los productos básicos permanecerán estables a pesar de los tifones que azotaron las principales provincias agrícolas en julio y pese al incremento del precio del petróleo en agosto. La tasa de desempleo fue de 12.7% en julio, superior a 12.2% de abril. Los analistas predicen que el desempleo aumentará el próximo año debido, en parte, a que los empresarios han dejado de invertir esperando por lo menos los resultados de las elecciones de mayo.

Como era de esperarse, el motín militar de julio afectó negativamente los precios de la bolsa de valores y el valor del peso, y representó, de acuerdo con algunos analistas, un retroceso de la economía de por lo menos un año y medio.<sup>37</sup> La presidenta Arroyo achacó la caída del peso a un “negativismo progresivo” en política y reconoció el efecto directo de la inestabilidad política en la economía. Después de la rebelión fallida el peso cayó en picada a causa de una serie de acontecimientos políticos, entre ellos la acusación de lavado de dinero contra el esposo de la presidenta, los rumores de otro intento de golpe, y la orden sin precedentes del Tribunal de Apelación de suspender a los principales funcionarios del banco central por haber clausurado un banco en 2000. Aunque posteriormente se desechó la orden, la confianza de los inversionistas ya se había mermado. Los dirigentes empresariales y los inversionistas extranjeros han criticado la intervención del Poder Judicial en las decisiones comerciales.<sup>38</sup> Esto puede servir para explicar por qué la inversión extranjera cayó 63% en la primera mitad de 2003 y la inver-

<sup>37</sup> “Analysts Say Economy Set Back by One and Half Years”, *PDI*, 28 de julio de 2003, p. A1.

<sup>38</sup> Un caso reciente atañe a la resolución de mayo de 2003 de la Suprema Corte para apoyar la decisión de la presidenta Arroyo en la cancelación de un acuerdo con la Philippine International Air Terminal Company (Piatco), un consorcio que incluye al famoso concesionario alemán Fraport. Piatco fue contratada en 1997 para construir y operar una terminal del aeropuerto internacional de Manila, pero Arroyo nulificó el contrato cuando la construcción ya estaba casi terminada porque detectó que resultaba perjudicial para el gobierno. Dicho contrato se firmó durante la presidencia de Ramos y se renegoció con el presidente Estrada.

sión local descendió 33%.<sup>39</sup> La renuncia del secretario de finanzas José Isidro Camacho en noviembre puede haber entorpecido el progreso económico del gobierno al acrecentar el ambiente de incertidumbre ya existente. Era el consejero económico de la presidenta Arroyo más antiguo y con un rango superior, y su gestión le confería credibilidad al programa de gobierno; además era muy respetado tanto entre las comunidades empresariales locales como entre las extranjeras.

Aunque el Congreso ha aprobado varias leyes importantes destinadas a beneficiar la economía, hay más de una docena de proyectos de ley en la agenda legislativa de la presidenta que aún esperan ser atendidos. Tales proyectos atañen, entre otras cuestiones, a las telecomunicaciones, los incentivos fiscales, la transmisión eléctrica y el estatuto del Banco Central. Algunas de las nuevas leyes promulgadas en 2003 fueron el Acta de Consecución, la enmienda a la ley contra el lavado de dinero, la ley sobre los activos de propósitos especiales que ayudará a los bancos a vender sus activos no ejecutables con descuento, así como las dos legislaciones sobre los trabajadores filipinos en el extranjero: el voto ausente y la doble ciudadanía.

## RELACIONES EXTERIORES

### Relaciones con Estados Unidos

Durante el mandato de la presidenta Arroyo una serie de políticas nacionales e internacionales han acercado a Filipinas y Estados Unidos, su antiguo centro colonial y actualmente un fuerte aliado. Esto representa una desviación del proceso que las tres administraciones previas habían emprendido para establecer una posición nacional más independiente, especialmente en la esfera diplomática. La presidenta Arroyo fue uno de los primeros dirigentes mundiales que apoyaron al presidente Bush en su declaración de guerra unilateral contra Irak, a pesar de la impopularidad de la decisión en Filipinas (numerosos legisladores, grupos cívicos e incluso la Iglesia católica cuestionaron la legitimidad de la guerra). Asimismo ha dado su firme apoyo a la “guerra contra el terrorismo” de Bush y a la política de Estados Unidos en Afganistán.

El presidente Bush recompensó en mayo el apoyo decidido de la presidenta Arroyo, cuando elevó la categoría de Filipinas a un “aliado importante no

<sup>39</sup> James Hookway, “Rule of Law Gone Haywire”, *FEER*, 4 de septiembre de 2003, p. 23.

perteneciente a la OTAN”, la misma categoría conferida a Israel y Australia, y recientemente a Tailandia.<sup>40</sup> La designación, que es puramente cosmética, tiene la función principal de otorgar un sello de aprobación a las fuerzas armadas filipinas y tailandesas, ya que no es probable que ninguna de ellas se una al ejército estadounidense en su programa de investigación y desarrollo, como lo han hecho otros aliados que no pertenecen a la OTAN.

Durante la visita de Estado de la presidenta Arroyo a Estados Unidos en mayo, se le prometió ayuda militar estadounidense por un total de 356 millones de dólares, destinados a la aplicación de reformas militares y al combate a los grupos terroristas nacionales que, se arguye, tienen vínculos con redes terroristas internacionales. Asimismo las fuerzas armadas de Estados Unidos continuarán realizando ejercicios militares con las de Filipinas. Se abandonó un plan anterior para enviar tropas de combate estadounidenses para combatir al grupo Abu Sayyaf en la provincia de Sulu porque fue preciso acatar una prohibición constitucional filipina.

Algunos críticos han cuestionado que toda la ayuda se canalice hacia los militares, principalmente porque reconocen la corrupción generalizada en las fuerzas armadas.<sup>41</sup> Es del conocimiento público que una parte considerable del presupuesto de los militares se pierde en sobornos, y que las armas y el equipo militar, incluyendo los que proporciona directamente Estados Unidos al ejército, se venden en el mercado negro. Los críticos desean que el gobierno gaste más en programas de desarrollo social y en infraestructura, especialmente en Mindanao, a fin de obtener nuevamente el control de las áreas rebeldes y ganarse los “corazones y las mentes” de sus comunidades.

La visita de Estado del presidente Bush a Filipinas en octubre, en su paso rumbo a la cumbre anual de los países pertenecientes al foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en Tailandia, estaba planeada deliberadamente para apoyar a la presidenta Arroyo, quien pocos días antes había dado a conocer que finalmente contendría por la presidencia en las elecciones de mayo de 2004. Debido a serias preocupaciones de seguridad, Bush pasó la noche en Japón, de modo que pudo hacer una visita relámpago de ocho horas a Manila sin tener que pernoctar en esta

<sup>40</sup> “Washington Pledges Troops to a Special Ally”, *FEER*, 29 de mayo de 2003, p. 10.

<sup>41</sup> El general Narciso Abaya, jefe de las Fuerzas Armadas de Filipinas, dijo en agosto: “Reconozco que hay concusión y corrupción a todos los niveles”. Véase Brett M. Decker, “A Fair Fight in the Philippines”, *New York Times*, 18 de octubre de 2003, p. A29.

ciudad. Dio un discurso en una sesión conjunta del Congreso de Filipinas, siendo el primer presidente de Estados Unidos que lo hace desde Dwight Eisenhower en 1960. Después de reunirse con la presidenta Arroyo y su gabinete, Bush manifestó que “los dos países habían formalizado un plan quinquenal para ‘modernizar y reformar’ el ejército filipino”.<sup>42</sup> Posteriormente sus ayudantes desmintieron esa declaración y aseguraron que todavía no se sabía con certeza qué tanto contribuiría Estados Unidos al plan, dado que su gobierno no había entregado aún los helicópteros militares estadounidenses usados por un valor 20 millones de dólares que el presidente Bush había prometido un año atrás con el propósito de perseguir al grupo Abu Sayyaf.<sup>43</sup>

### **Posición internacional**

En febrero la presidenta Arroyo asistió a la decimotercera reunión cumbre del Movimiento de los No Alineados en Kuala Lumpur, Malasia, en donde se encontró con otros líderes de los países en desarrollo. Gran parte de la reunión se centró en la inminente guerra en Irak, y la mayoría de los 116 miembros del Movimiento expresó su ira contra Estados Unidos. Los analistas políticos esperaban que la presidenta Arroyo fuera censurada por alinear a Filipinas en forma decidida con la “Coalición de los Voluntarios”, estados que apoyaron al presidente Bush y su política sobre Irak. Sin embargo, fue electa vicepresidenta del Movimiento.

En octubre Filipinas fue elegido para figurar entre los cinco miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas junto con Argelia, Benin, Brasil y Rumania. Estos cinco países, seleccionados conforme a una distribución geográfica acordada con anterioridad, desempeñarán sus funciones en el Consejo desde el 1 de enero de 2004 hasta el fin de 2005. Se unirán a los cinco miembros permanentes del Consejo —China, Francia, la Federación Rusa, el Reino Unido y Estados Unidos— junto con los otros cinco miembros no permanentes cuyas funciones concluyen en 2004.

<sup>42</sup> David E. Sanger, “Bush Cites Philippines as Model in Rebuilding Irak”, *New York Times*, 19 de octubre de 2003, p. 1.

<sup>43</sup> *Idem*.

**ANSEA**

Por iniciativa del primer ministro de Singapur, Goh Chok Tong, los diez miembros de la Asociación de Naciones del Sureste de Asia (ANSEA, por sus siglas en inglés) convocaron apresuradamente a una reunión cumbre con China y Hong Kong a fin de abordar la reciente crisis de salud provocada por el virus del síndrome respiratorio agudo. El grupo se reunió en Bangkok, Tailandia, donde emitió un comunicado que subraya dos puntos principales: “la responsabilidad colectiva para aplicar medidas estrictas para controlar y contener la expansión del virus, y la importancia de la transparencia en la aplicación de estas medidas”.<sup>44</sup> En la reunión también se dictaron disposiciones concretas, como estandarizar los exámenes sanitarios de todos los viajeros de la región, compartir la información relativa a las personas infectadas por este mal, así como su localización y una cooperación más estrecha con la Organización Mundial de la Salud, que ha encabezado la lucha global contra dicha enfermedad.

En casos como una crisis regional de esta naturaleza es donde la ANSEA puede resultar más efectiva a causa de que tiene la capacidad de congregarse a sus miembros para llevar a cabo una rápida acción política colectiva y para ejercer una presión diplomática, en este caso sobre China, a fin de adoptar una estrategia común. El síndrome respiratorio agudo es una forma virulenta de neumonía que probablemente se originó en el sur de China y se expandió rápidamente por el mundo. La epidemia ha matado a más de 350 personas en el orbe, la mayor parte de ellas en China y Hong Kong, y ha afectado seriamente los viajes y los negocios internacionales (por ejemplo los hoteles, las líneas aéreas y el turismo sufrieron enormes pérdidas) debido a la desconfianza de los consumidores.

Otra área en que los países miembros de la ANSEA —especialmente Malasia, Singapur, Tailandia y Filipinas— han cooperado estrechamente es la lucha contra el terrorismo. Mediante un intercambio de información de inteligencia, la coordinación de las agencias de seguridad y la inspección rigurosa de las fronteras, se han descubierto confabulaciones terroristas y se ha arrestado a sospechosos que han enfrentado cargos en los tribunales. La red clandestina Jemaah Islamiah es considerada actualmente la amenaza más seria para la región.

<sup>44</sup> Michael Vatikiotis, “ASEAN and China-United in Diversity”, *FEER*, 8 de mayo de 2003, pp. 14-17.

### **Relaciones con China**

En febrero el gobierno de Filipinas declaró que China había colocado una nueva boya marcadora en las aguas que rodean las Islas Spratly. Esto constituye una violación a la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Sur de China, que China y los países miembros de la ANSEA firmaron en 2002. Tal declaración establece que todos los firmantes deben abstenerse de posesionarse de cualquier territorio o emprender alguna actividad en las áreas en disputa, entre las cuales se incluyen las Islas Spratley (reclamadas por Brunei, China, Malasia, Filipinas, Taiwan y Vietnam), el Bajío de Scarborough (reclamado por China y Filipinas) y las Islas Paracel (reclamadas por China y Vietnam). En años recientes China ha ido reforzando lentamente las estructuras que ha construido cerca de las islas ocupadas por Filipinas que se localizan en el Mar del Sur de China.

Se cree que todas estas islas en disputa se encuentran sobre extensos depósitos submarinos de petróleo y minerales, además de que están situadas estratégicamente en las rutas marítimas comerciales entre Japón y el resto de la región. Al colocar boyas y al realizar actividades subrepticias en las áreas en disputa, la intención de China puede ser preparar el escenario para una futura reclamación basada en la decisión de 2002 de la Corte Internacional de Justicia. La Corte recientemente otorgó la propiedad de dos islas del Mar de Célebes a Malasia, y no a Indonesia, pues determinó que la soberanía se basaba en que Malasia había supervisado las islas de manera real y continua.

A pesar de estas disputas, en septiembre China aceptó un acuerdo de canje de divisas con Filipinas por un monto de 1 000 millones de dólares y que tendrá una duración de tres años. Mediante dicho acuerdo Filipinas puede cambiar hasta 55 000 millones de pesos filipinos por 1 000 millones de dólares en moneda china, que podrán convertirse en dólares estadounidenses en caso de haya una crisis en la balanza de pagos o en la liquidez temporal. Esto forma parte de la denominada “iniciativa Chiang-Mai”, conforme a la cual los países del Sureste de Asia pueden vincular sus reservas internacionales con las de China, Japón y Corea del Sur a fin de evitar una crisis financiera similar a la de 1997. Además China prometió créditos blandos de 400 millones de dólares para modernizar 200 kilómetros de vías de trenes que corren hacia el norte desde Manila y 100 millones de dólares para desarrollar el sector agrícola.

## OBSERVACIONES A MANERA DE CONCLUSIÓN

A diferencia de muchos de sus vecinos, Filipinas es una democracia. Las grandes luchas por el poder entre la clase gobernante del país se encuentran constreñidas en gran medida por los procesos constitucionales, y es mediante ellos que se negocia. Dichos procesos incluyen la participación activa y a menudo competitiva de los tres poderes del gobierno, tal como se pudo apreciar en los acontecimientos de 2003. Los frenos y equilibrios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de Filipinas están en pleno juego.

En esta competencia tripartita, en que actúan tanto el poder como la riqueza, la presidencia no tiene una ventaja exagerada. Esto ayuda a explicar gran parte del liderazgo de la presidenta Arroyo, cuyos críticos afirman que está demasiado afectada por las variables políticas, opuestas a las variables de lineamientos políticos e incluso a las variables de principios. Y sin embargo las variables políticas son las que más cuentan en la ecuación de la democracia electoral. Después de todo, al igual que la mayor parte de los filipinos la presidenta Arroyo tiene los ojos puestos en las elecciones de mayo de 2004. Esto es una medida del compromiso del país con los procesos democráticos, si es que no con los valores democráticos.

Como muestran los acontecimientos de 2003, el sistema democrático de Filipinas está sometido a una tensión severa. Muchas personas se preguntan si tal sistema podrá abordar en forma efectiva el problema paralizante de la desigualdad económica extrema y los males de la pobreza y la corrupción igualmente fundamentales. O si podrá abordar otros problemas nacionales constantes que son el resultado de instituciones estatales débiles frente a rebeliones armadas y hábitos políticos profundamente arraigados, como el faccionalismo, el compadrazgo y el partidismo ciego. A medida que las oscuras memorias de la dictadura de Marcos se alejan, algunos filipinos parecen estar sucumbiendo al canto de la sirena del gobierno autoritario. Por ahora, sin embargo, los posibles hombres fuertes del país han sido apartados y desacreditados en un golpe embarazoso. Hoy día, a pesar de todo su caos y sus males, la mayor parte de los filipinos aún tiene confianza en su democracia y se prepara apasionadamente para una elección más.

## APÉNDICE

<i>Nombre oficial</i>	República de las Filipinas
<i>Capital</i>	Manila
<i>Extensión territorial (miles de km<sup>2</sup>)</i>	300
<i>Población 2002 (millones)</i>	82
<i>Religión(es)</i>	Mayoría católica. Existe una minoría musulmana y protestante
<i>Idioma(s)</i>	El tagalog es el idioma oficial. Existe un gran número de idiomas regionales. El inglés es obligatorio en la enseñanza y su uso es frecuente en la administración y los medios de comunicación
<i>Moneda<sup>1</sup></i>	Peso/P
<i>Gobierno</i>	Régimen presidencialista matizado por un poder legislativo bicameral
<i>Principales organizaciones políticas:</i>	Lucha de los Filipinos Demócratas (LDP), Partido Liberal, Partido Nacionalista, Coalición Nacional Popular (NPC), Movimiento para una Nueva Sociedad, Partido Popular por la Reforma, Lakas ng Edsa-Union Nacional de Cristianos Demócratas (Lakas)
<i>Presidenta<sup>2</sup></i>	Gloria Macapagal-Arroyo
<i>Vicepresidente</i>	Teofisto T. Guingona, hijo
<i>Secretarios clave:</i>	
<i>Energía</i>	Vicente S. Perez, hijo
<i>Finanzas</i>	Juanita D. Amatong
<i>Relaciones Exteriores</i>	Delia Domingo Alberto
<i>Comercio e Industria</i>	Cesar Purísima
<i>Defensa Nacional</i>	Eduardo R. Ermita
<i>Gobernador del Banco Central</i>	Rafael B. Buenaventura

<sup>1</sup> Para tipo de cambio véase el anexo estadístico.

<sup>2</sup> La última revisión de estos datos fue en enero de 2004.

Fuentes: diversas.